888 - 1

El otro yo del escándalo

ALFONSO LASO B.

Se está haciendo rutinario que "poderes fácticos" ataquen sistemáticamente a los órganos constitucionales en los cuales se hace carne el sistema democrático nacional. Desde la reinstalación del estado de derecho en nuestro país, el 11 de marzo de 1990, tras 17 años de interrupción dolorosa y abusiva, han sido numerosos las intentos de desprestigiar ante la opinión pública a los poderes Legislativo o Ejecutivo.

Los autores de las arremetidas tienen varios elementos en común. En primer lugar, fueron destacados cooperadores o defensores del régimen militar, ya sea como ministros de Estado, asesores o *consiglieri* de palacio, empleados públicos de alto nivel, a la vez que parientes cercanos de alguna alta autoridad uniformada. Seguidamente, dichos *catones* de las instituciones democráticas arremetidas están o han tratado de introducirse en ellas, ya sea como parlamentarios o como altos dirigentes de partidos políticos. Desde la misma trinchera, disparan hacia adentro, buscando un protagonismo que les presente como patriarcas integristas, salvadores de la moralidad pública.

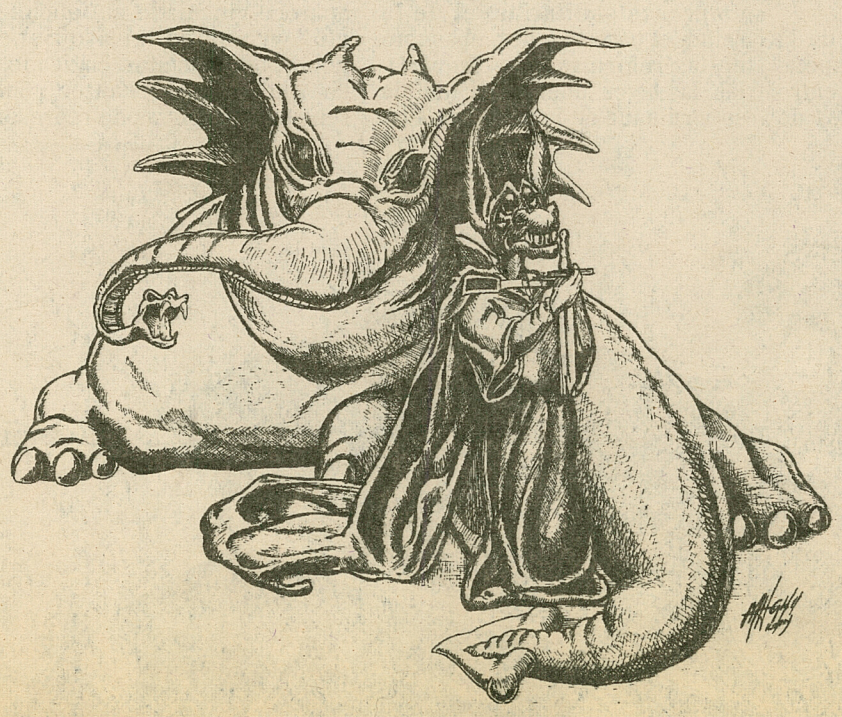
En tercer lugar, varios de estos acusadores se han visto envueltos en el pasado en diferentes episodios de seudo espionaje político, apoyados por servicios clandestinos de seguridad, llegando incluso a hacer el ridículo más inmisericorde. Pero no escarmientan y repiten el numerito.

Lo más preocupante de esta contumacia es que las denuncias que efectúan resultan ser el montaje de una maniobra política que, lejos de buscar la "moralidad" ofendida, apuntan a desbancar a algún líder de importancia, aun cercano a la bancada en que se encuentran. Esta vez le tocó el turno al honorable diputado y presidente de Renovación Nacional, don Andrés Allamand. He leído con detenimiento el discurso pronunciado por este parlamentario en la Cámara de Diputados. Igualmente presencié por las cámaras de televisión la ovación que le fue brindada al término de su intervención. Me parece un abuso, por decir lo menos, el vejamen injustificado al cual ha sido sometido. Creo que sólo enfermos mentales, afectados de una grave sicopatía de *vedettismo*, pueden llegar a maniobras de tal catadura.

Todos estos ataques traen a la memoria las prácticas de Goebbels en el oscurantismo nazi o de Lavrenti Beria en la "democracia popular" soviética. Son hermanos de la misma sangre. Pero esta vez se pasaron del límite de lo permitido por la paciencia del *fair play* político. En efecto, estos personajes entraron en un juego diabólico inventado por el narcotráfico, cual es el de involucrar en sus redes a cuantos tienen poder político, de manera tal que se llegue a la conclusión de que "mejor no se haga nada, porque están todos metidos".

Los hombres que dirigen nuestra política han salido al paso de estas maniobras. Pero no es suficiente; el fondo está aún intocado. La verdad es que se pretende que el sistema democrático aparezca como corrupto para arrasarlo. Creo que debe denunciarse públicamente esta sucia tarea, que ya tiene más de cinco años de metódica dinámica. Ayer fue el sueldo de los parlamentarios, más tarde fue la vida privada de dichas autoridades. Después la corrupción y el tráfico de influencias. Hace muy poco fue la moral afectada por el "libertinaje". Hoy es el consumo de drogas. Mañana será otro tema.

MATT HARRINGTON-OP ART



Chile se mantiene como una isla respecto de las grandes lacras que afectan al mundo en esta última década del siglo. Acá no hay guerra civil, la corrupción es aislada y reducida a casos anecdóticos, la sociedad mantiene en su conjunto un nivel de apego a los valores más que razonable. El tráfico de drogas recién inició su acometida violenta en la juventud y está todo el país de pie para rechazarla. Toda magnificación de problemas de interés nacional busca siempre o el mezquino interés de la ventajilla política o, lo que es más grave, tender cortinas de humo a grandes flaquezas aún persistentes. El biombo del narcotráfico, problema que sí existe en niveles bajo control, busca tapar el escandaloso intento de no pagar la deuda al Banco Central, pretensión que nadie se ha atrevido a calificar como lo que es: el escenario de la máxima corrupción jamás vista en Chile, en el que no se trepida en el uso de cargos de representación popular o altas magistraturas designadas a dedo para defender intereses personales.

Tras toda la magnificación de la campaña nacional de prevención de Sida, hay una desviación del problema de fondo, cual es que no existe explicación alguna para que los miles de niños y jovencitas de la calle anden prostituyéndose como estrategia de sobrevivencia.

La sociedad chilena no debe dejar embaucarse con *shows* de mala categoría o con chiítas morales que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Nuestros gobernantes, parlamentarios, jueces y líderes políticos son gentes probadamente de bien, elegidos por nosotros o investidos de su magistratura en forma constitucional y debemos tenerles fe. Podemos disentir de sus posiciones o puntos de vista. Debemos llamarles la atención cuando se equivoquen, pero no podemos permitir que sean utilizados o arrastrados a cuestionamientos mal intencionados que buscan acabar con el sistema democrático para el regreso a los 17. Siempre será igual: el ataque provendrá desde el fondo del golpismo utilizando artistas de turno.

Alfonso Laso Barros es abogado.

¡Cuidado!

ANDRES AYLWIN A.

Resulta preocupante lo que en una extensa entrevista ha planteado el señor Fernando Molina en lo que respecta a una excesiva concentración en la propiedad de los medios de comunicación y, por lo mismo, una clara amenaza al pluralismo que debe existir en los medios de información.

Igualmente preocupante es que hechos tan graves como los denunciados por el señor Molina no hayan tenido una inmediata reacción de los líderes de opinión pública. En realidad, lo que se está planteando es que así como existe entre nosotros una institucionalidad claramente atada a enclaves no democráticos, también existiría una libertad de información crecientemente subordinada a un grupo reducido de personas o empresas.

Según expresiones del señor Fernando Molina, "el pluralismo de esta democracia está seriamente amenazado porque la tendencia será a la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, a formar grandes consorcios que monopólicamente van a controlar un mercado que debe ser libre y que debe asegurar el pluralismo y la diversidad cultural".

Este tema debe ser afrontado seriamente y con gran coraje por nuestra naciente democracia. Ello supone, antes que nada, que la opinión pública esté consciente del problema y debidamente informada de la verdad. Pues bien, en materia de información, una de las grandes verdades es que en Chile existen diversos medios de comunicación para los cuales algunos temas no se pueden afrontar, determinados planteamientos no tienen cabida y ciertas personas son silenciadas o tergiversadas. Mientras esto sucede, tienden a desaparecer medios de información que han contribuido a mantener un necesario y amplio pluralismo.

La extensión de estas situaciones podría implicar que la libertad tan duramente conquistada en nuestro país podría sucumbir, en los hechos, aplastada por determinados grupos que controlen la generalidad de las comunicaciones. En este aspecto es indudable que la libertad de expresión no puede quedar exclusivamente subordinada a la ética y buena voluntad de un grupo reducido de personas que mañana pueden, incluso, enajenar sus medios de comunicación. El asunto es más preocupante si se considera que el problema de la concentración de los medios no parece ajeno a la influencia, directa o indirecta, de quienes financian muchos medios, que son fundamentalmente los avisadores. Este último aspecto no puede desvincularse de la gran influencia que tienen determinados sectores económicos en el financiamiento general de la política, siendo ellos decisivos, incluso, en la elección de determinados senadores o diputados.

En toda esta preocupante realidad existe un dramático dilema que nuestra democracia debe resolver. Ella acepta y ampara un sistema social de mercado que implica el fortalecimiento y seguridad de la empresa económica privada, aun la de gran magnitud. Cuando esta última pretende convertirse no sólo en base del desarrollo económico, sino además en tutora de las conciencias, a través del control de los medios de comunicación, o influenciando el acontecer político, ella desvirtúa absolutamente su papel hasta el extremo de hacer peligrar su necesaria legitimidad moral. En este aspecto las democracias deben ser muy claras y, así como ellas no entregan armas a sus ejércitos para que disparen contra el pueblo, tampoco garantizan la gran propiedad financiera privada para que ésta destruya algo que es tan de la esencia de la democracia como es el derecho a pensar, a elegir, a expresarse libremente y a recibir una información amplia y pluralista.

El señor Molina, con sus declaraciones, ha colocado en el primer nivel del debate público un tema que preocupa hondamente a los que contribuimos a recuperar la democracia en nuestro país. Somos muchos los que sentimos que lenta e inexorablemente tienden a disminuir los espacios de libertad para la expresión amplia de cualquier planteamiento progresista o cuestionador.

En los últimos tiempos hemos presenciado el desaparecimiento de *Fortín Mapocho*, de revista *Análisis*, la reducción de *El Siglo* a una publicación semanal y, en otros medios de información, una creciente discriminación con respecto a determinados temas o ideas. En este último aspecto podríamos señalar que, frente a la creciente discriminación de los espacios de libertad de información, algunas personas actúan con el mismo criterio ya denunciado por un defensor de los derechos humanos, que llevado a nuestra realidad podría expresarse en los siguientes términos: "Se redujo a una publicación semanal el diario *El Siglo*, pero yo no me preocupé pues no soy comunista; hicieron quebrar a *Fortín Diario*, pero yo guardé silencio porque eran personas excesivamente luchadoras; desapareció *Análisis*, pero ello me fue indiferente pues era una revista ajena a mi manera de pensar; discriminaron a personas o ideas en diversos medios de comunicación, pero yo callé pues afortunadamente no estaba entre los discriminados. Por último, cuando llegó el turno al indiferente o silencioso, éste reclamó con pasión... pero ya era demasiado tarde".

Por eso, desde esta columna, que muchas veces he individualizado como mi principal espacio de libertad, expresamos hoy nuestra profunda preocupación: ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! Lenta, pero inexorablemente, grandes intereses financieros están limitando a muchos chilenos al derecho real a expresarse y a que su manera de pensar y sentir sea adecuadamente conocida y valorada por la opinión pública. Aún es tiempo para que reaccionemos con coraje y visión de futuro. El dolor abundantemente derramado por muchos chilenos para recuperar la democracia y el derecho de las nuevas generaciones a vivir en verdadera libertad, nos exigen una respuesta adecuada y razonable al desafío moral que enfrentamos. De algo no puede haber dudas: los grandes intereses financieros no pueden elegir senadores ni diputados, ni ser los principales orientadores de la forma de pensar y sentir de los chilenos.

Andrés Aylwin Azócar es diputado del PDC por San Bernardo.